MEMORANDUM RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION QUE
AYUDE A PROTEGER A LOS PERIODISTAS EN EL EJERCICIO LEGITIMO
DE SU PROFESION.

Respecto al nombre

Cuando presenté la idea en público mencioné a este organismo como un "tribunal de pares", por llamarlo de algún modo. El nombre interesó, pero no me parece muy adecuado. Suena demasiado presuntuoso y solemne, y quizá estaría fuera del marco de nuestras leyes.

Tuvo sentido usar la palabra "pares" para subrayar "iguales"; es decir, el deseo de que ciertas conductas de los periodistas sean juzgadas por periodistas. Pero el énfasis en las palabras a veces nos lleva sin transición al engreimiento en las ideas: nosotros no debemos dar jamás la impresión --ante otros grupos sociales-- de que la arrogancia y la estulticia nos han convencido que debemos gobernarnos a través de tribunales de excepción porque estamos fuera del alcance de las leyes que rigen al resto de los mexicanos "comunes".

Ahora, puestos a reflexionar para que ya se den pasos en firme hacia la constitución del organismo, hay que pensar en un nombre más adecuado, que tenga cierta fuerza expresiva pero no parezca un alarde.

(Lo del nombre es un aspecto importante. Tendrá que ser manejado en informes, citas, referencias, etc. Debe tener eficacia, pero sin prestarse a equívocos).

Se me ocurre que llamarlo "Comisión" en vez de "Tribunal" es más apropiado. Y completaría mi sugerencia con el nombre del periodista mexicano que murió asesinado en El Salvador. Quedaría entonces así: "Comisión Ignacio Rodríguez Terrazas".

También se podría llamar "Comisión Defensora de la Libertad de Prensa", o más simplemente "Comisión Nacional de Prensa". En fin, para los efectos restringidos de esta nota, me referiré al organismo como la "Comisión".

Una cuestión de principios.

Enfatizo la importancia de proceder de acuerdo con principios que den un alto contenido ético a nuestra acción, y confirmen la fidelidad de los periodistas mexicanos al régimen jurídico que vertebra la vida de nuestra nación, así como a las ideas sociales --de tipo general, no partidista-- que conducen a la gestión democrática de nuestra sociedad.

(Es fundamental importancia dejar a la Comisión completamente fuera del juego de los partidos en que puedan militar los periodistas. También fuera de las organizaciones gremiales que existen. La Comisión no las sustituye ni las suplanta. Por el contrario, son ellas las que contribuyen, junto con periodistas no agremiados, a crear la Comisión y a otorgarle su fuerza moral.

La Comisión surgirá sin bandera política, por completo independiente y con una sola finalidad: encarar, como concreción de la solidaridad entre periodistas, la defensa de aquellos colegas que sufran persecución, amenazas o represión como consecuencia del desempeño de sus funciones).

Con esto en mente, he aquí algunos de tales principios, enunciados de un modo obviamente preliminar, sujetos no sólo a revisión de contenido y lenguaje, sino también a ser modificados o enriquecidos con las aportaciones de ustedes:

1. Los periodistas no reclamamos un régimen legal de excepción. Eso sería una pretensión fascistoide. Reconocemos que nuestra actividad profesional tiene que regirse por las normas generales que hacen posible la convivencia de los mexicanos, sobre la base de que todos somos iguales frente a la ley y de que en este país no existen privilegios ni fueros para nadie.

2. En tanto se llegue a la reglamentación de nuestro ejercicio profesional --como se da en tantas otras profesiones de significado social-- los periodistas actuamos con pleno conocimiento de la Ley de Imprenta y de las sanciones que los códigos penales imponen a los delitos de difamación y calumnia.

3. Los periodistas sólo aspiramos a que se nos respete en el legítimo ejercicio profesional y a que, cuando esto sea social o legalmente exigible, se nos otorguen las garantías para que ese ejercicio se cumpla; pero no aspiramos a someter a otras personas a la férula de la prepotencia, amparada en nociones absolutamente

antidemocráticas como la de creer que somos o pertenecemos a un poder "independiente" de los que la Constitución establece.

4. La solidaridad entre periodistas, como concepto y como práctica enaltecedora, no debe malentenderse y pervertirse al extremo de que por parte de otros sectores críticos mereciera un nombre distinto: complicidad. Como gremio o como simple conjunto de individuos que se identifican entre sí en la práctica de un oficio, los periodistas debemos ser primeros en condenar a aquellos que trasgreden las normas éticas, atentan contra la dignidad de instituciones y personas e incurren en flagrantes delitos.

5. La Comisión no nace para servir de escudo a prevaricadores o a seres antisociales disfrazados de periodistas, sino para ayudar a proteger el legítimo ejercicio de una profesión, y para ganar respeto hacia ésta.

6. Será necesario que quienes firmen este documento mediten bien antes de hacerlo, porque en el fondo lo que se estaría creando es un organismo que --junto con otros, por supuesto-- contribuirá a clarificar las responsabilidades de los periodistas, y de ningún modo a crear una especie de fuero. La firma del documento compromete a cada uno con los principios enunciados que serán dados a conocer a toda la sociedad mexicana, para que ella nos exija su cumplimiento.

Procedimientos y estatutos

Es de carácter exclusivamente moral la fuerza de que se hará depositaria a la Comisión para que ésta la oponga a las agresiones

contra los periodistas.

Por ello es muy importante saber si somos capaces de construir esa fuerza moral y discutir cómo podemos lograrlo.

En mi opinión, son dos las bases sobre las que se edifica la eficacia de este organismo: El número de periodistas que en todo el país manifiesten con su firma el apoyo solidario, y el cuidado extremo con que procedan los integrantes de la Comisión.

Para lo primero, se requiere una consulta abierta, amplísima y democrática. No veo conveniente que esta consulta se haga a través de las organizaciones de periodistas ya existentes, sino por medio de un comité ad hoc que incluya representación de los grupos que adopten la idea y también a personalidades del gremio que se hayan mantenido independientes.

Este comité promotor no tiene por qué ser muy numeroso, pero sí representativo y debe de proceder con un método que previamente se explique a los consultados. Obviamente deberán expresarse las fechas en que se inicia y concluirá la encuesta, y aquélla en que se darán a conocer los resultados, tanto a los periodistas como a la opinión pública de todo el país.

El material que se envíe a los periodistas consultados tendría que incluir una declaración de principios y las normas estatutarias básicas. Asimismo, una descripción del procedimiento que pudiera seguirse para la constitución formal de la Comisión.

La redacción de los estatutos me parece tarea especialmente difícil y delicada.

Hay que establecer normas como éstas:

1. La Comisión sólo podrá actuar en los siguientes casos:

a) cuando se le haga denuncia de un atropello, directamente por el periodista que fue o está siendo víctima;

b) cuando el atropello sea denunciado por colegas o familiares de la víctima;

c) cuando los hechos sean del dominio público, manifiestamente graves, y resulte obvio que la o las víctimas, sus colegas o familiares no han estado en capacidad de hacer denuncia formal.

2. En cualquiera de los casos anteriores, la Comisión procederá en la siguiente forma:

a) inmediatamente que tenga conocimiento de los hechos, exigirá por medios públicos que cese la agresión, la amenaza o persecución contra el periodista;

b) realizará una investigación todo lo amplia que le sea posible, para deslindar responsabilidades;

c) en plazo perentorio dará a conocer su criterio con base en los elementos que aporte la investigación;

d) si se comprueba la agresión de cualquier naturaleza contra el periodista, la Comisión enviará su protesta a los responsables, en términos que se estimen adecuados, y promoverá entre todos los colegas solidarios que en cada medio de difusión se levanten protestas igualmente proporcionales a la naturaleza de los hechos.

e) la Comisión no cejará en esta actitud hasta que el periodista víctima de la agresión considere que está a salvo, y sus derechos adecuadamente protegidos;

f) cuando las circunstancias así lo demanden, la Comisión proporcionará auxilio legal a la víctima, hasta que el agredido pueda restablecer por sí mismo la defensa de estos intereses legítimos;

g) en casos especialmente graves, la Comisión, junto con las asociaciones gremiales, promoverá y se sumará enérgicamente a otros actos de protesta pública, y arrostrará todas las consecuencias que exija la solidaridad.

3. La Comisión no intervendrá en los conflictos internos de los periódicos o de las agrupaciones de periodistas.

Es obvio que la Comisión debe contar con recursos para telegramas, desplegados, viajes de investigación y otros gastos. No sería justo ni posible que sus miembros asumieran esta carga económica. Y debe rechazarse de plano la sola idea de acudir al gobierno o a cualquier otro patrocinio para conseguir esos recursos. He aquí un problema que no es menor, sino la piedra de toque que puede dar al traste con todo este